

# LA DIMENSION POLITICA DE LA CRISIS ECONOMICA ARGENTINA

PATRICIO GAJARDO LAGOMARSINO\*

Cualquier intento por mostrar la gravedad de la crisis que sufre actualmente Argentina, nos lleva inevitablemente a la presentación de una serie de datos estadísticos que nos muestran la magnitud de los problemas que viven los habitantes de Buenos Aires, Rosario, Córdoba o Mendoza para sobrevivir diariamente, pero no nos dicen nada sobre la incapacidad que ha demostrado un país potencialmente poderoso, tanto geográfica como poblacionalmente, para resolver este verdadero dilema que enfrenta como nación, y que se traduce en un empobrecimiento inexplicable y constante, que se arrastra por más de dos décadas.

A uno le cabe preguntarse, y con justa razón, ¿cómo la elite político-intelectual argentina no ha sido capaz de encontrar las causas de la crisis? ¿Es que acaso en ese país, que por muchos años ostentó los mejores indicadores en el plano cultural de América Latina, no existen los especialistas y técnicos para resolverla? Es evidente que cualquiera que conozca a nuestro vecino, no puede sino desconcertarse aún más frente a esas dudas. Por lo tanto, se recurre en forma insistente a la falta de voluntad política de los mandatarios argentinos. Crítica que se transformó en una constante en el caso del ex presidente Alfonsín, y que comenzó a resurgir con fuerza contra el presidente Menem, luego de los fracasos sucesivos de sus diversos programas económicos, aplicados desde que asumió el mando el 8 de julio del año recién pasado.

Si asumimos en principio que esta crítica es de alguna manera efectiva, debemos ser capaces de superar nuestros prejuicios iniciales. Es decir, no pretender atribuir esta falta de voluntad a razones idiosincráticas, sino intentar explicar cuáles son las causas que dificultan a los gobiernos que han asumido el poder en Argentina y, por consiguiente, a sus mandatarios, la aplicación de políticas efectivas que resuelvan los problemas que se han transformado en el núcleo de la actividad política, como es vencer una inflación endémica, y disminuir el tamaño de un Estado hipertrofiado e ineficiente.

Y decimos bien, cuando señalamos que éstos son los problemas políticos de la Argentina, y no tan sólo situaciones económicas. Compartimos, en este aspecto, la opinión del politólogo argentino Marcelo Cavarozzi, quien nos advierte con desazón que desde la caída del primer gobierno del general Perón en 1955, se reemplazó

\* Postgraduado en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Brasilia. Historiador, Universidad Católica de Chile. Magister en Estudios Internacionales, Universidad de Chile, Profesor Instituto de Ciencia Política Universidad de Chile.

la política por la inflación (1). No hubo en la práctica, ni política democrática estable ni autoritarismos existosos, y más allá de la inestabilidad institucional, que se arrastraba como un problema grave desde 1930, la inflación se terminó convirtiendo en el mecanismo que permitió la celebración de compromisos intersectoriales, al actuar como lubricante de los conflictos económicos y sociales.

Nos agrega Cavarozzi, la economía argentina creció casi ininterrumpidamente entre los años 1959 y 1974, sólo en 1962 el producto bruto experimentó una variación negativa. La Argentina funcionó de modo casi automático y el impacto que produjeron los gobiernos de distinto signo que se sucedieron, ya sea por generación democrática o por intervención militar, fue mínimo, en la medida que todos compartieron una filosofía básica: la de no desviar la economía del curso que le marcaba una mediocre etapa de sustitución de importaciones (2).

Y frente a este errado consenso en lo económico, la política no importaba, hasta el punto que en este período constituye casi un lugar común señalar que en la Argentina se sucedían las intervenciones militares, sin que esto perturbara las actividades normales de los ciudadanos.

El historiador argentino Félix Luna nos describe el panorama que se vivió en 1962 cuando fue derrocado el presidente Arturo Frondizi: "El 28 de marzo de 1962 la Argentina careció de Presidente. El mandatario constitucional estaba confinado en Martín García desde las ocho de la mañana, y quienes lo habían depuesto se reunieron a las diecisiete horas para ver qué hacían con el poder. Sin embargo, el país no se alteró por esta curiosa circunstancia. Todo fue normal en esa jornada: los chicos fueron a la escuela, los empleados a sus oficinas, los mercaderes a sus comercios. La más completa indiferencia había rodeado al derrocamiento del doctor Arturo Frondizi" (3).

Es decir, nada cambiaba ni se pretendía cambiar frente a este acuerdo implícito de descargar las responsabilidades en el Estado. Apreciación compartida por todos los sectores políticos y también por los militares. El Estado argentino, entonces, se fue cargando con fracasos propios (a raíz de los sucesivos colapsos de programas económicos que se proponían objetivos ambiciosos, pero imposibles) y de culpas ajenas, y en ese proceso se fue desgastando progresivamente.

De ahí que todo el período que va desde 1974, en el que se incluye el segundo gobierno peronista 1973-1976, el fracasado régimen autoritario (1976-1983), y el retorno a la democracia con el presidente Raúl Alfonsín, constituyen intentos fallidos para revertir la cada vez más crítica situación económica, sin intentar sacrificar los beneficios sociales que había otorgado durante años el paternalismo estatal.

Ahora bien, esta falta de responsabilidad política de los partidos, sumado a las

(1) Cavarozzi, Marcelo: *De la inflación como política a la construcción de un sistema de partidos*. Bs. As. Plural 10/11. Los partidos políticos argentinos, 1988, p. 5.

(2) *Ibid.*, pp. 5-6.

(3) Luna, Félix: *Golpes militares-salidas electorales*. Bs. As., Edit. Sudamericana, 1983, p. 123.

constantes intervenciones militares, que se sucedieron desde 1930 hasta 1976, hicieron de las fuerzas armadas un actor legítimo, y era natural, por consiguiente, que todas las corrientes políticas intentaran encontrar puntos de apoyo en los militares para lograr sus fines. Esta situación sólo concluyó con el fracaso del último gobierno militar que, a diferencia de las anteriores intervenciones, intentó imponer un proyecto reestructurador de la economía y la política del país, que terminó en un desastre tanto económico como militar, luego de la aventura de las Malvinas.

Por eso, en la práctica, es a contar de 1983, cuando se produce la reinserción del país en la democracia, que surge con fuerza la necesidad de contar con partidos políticos organizados, institucionalizados y representativos. Situación que nunca se dio en la Argentina, en parte debido al rol que cumplieron las FF.AA. desde 1930, como también al surgimiento de una figura que irrumpió en la vida política en 1945, que asumió el poder en 1946, y que fue derrocada en 1955: Juan Domingo Perón.

El peronismo marcó la vida política del país, e introdujo una nueva elite al juego político: los sindicatos. Estos incorporaron a los sectores obreros al quehacer político, desplazando a los partidos, que nunca habían logrado constituirse en entidades realmente representativas. Por consiguiente, lo que iba a ser una necesidad en 1983, es decir, la existencia de partidos políticos fuertes que pudieran proponer e incorporar a vastos sectores de la población a un programa de reforma, fueron debilitados por la acción carismática de un líder que tuvo la habilidad de visualizar la fuente de poder que constituían las organizaciones gremiales, a las que vinculó institucional y sentimentalmente al rol del Estado. De hecho, la CGT (Central General de Trabajadores) constituyó en el primer gobierno de Perón una de las tres ramas del partido oficial. Es decir, la organización sindical fue impuesta desde arriba a través de una audaz acción del gobierno, y la protectora acción del Estado.

De ahí que se hable de la peronización de la política desde 1955, cuando Perón fue derrocado, hasta la fuerte dependencia del movimiento obrero al carismático líder, lo que llevó a que todos los fenómenos políticos de ese período se centraran en la figura de Perón, en que se supo manejar, durante los casi veinte años que duró el exilio, el quehacer político del país (4).

A pesar de las permanentes tensiones existentes entre el peronismo y las fuerzas armadas en el período que va de 1955 hasta 1973, lo cierto es que existió durante ese lapso un consenso básico que implicaba entender el desarrollo del país como un resultado de la acción determinante del Estado.

(4) Gajardo L., Patricio: *La naturaleza de las crisis políticas y de los procesos de transición en Argentina*. Santiago, Rev. Política N° 15, marzo 1988, pp. 135, 136 y 137.

## LOS INTENTOS DE REFORMA

El fracaso del tercer gobierno peronista marcó el fin de la propuesta estatista en la Argentina, lo que, sumado a la muerte del líder en 1974, aceleró las tensiones al interior del peronismo, lo que llevó al gobierno de la sucesora presidenta María Estela Martínez de Perón, a una crisis terminal que se reflejó en la violenta acción de la guerrilla de izquierda liderada por los Montoneros y el ERP\*.

La crisis política fue definida como una enfermedad crónica, que se remontaba a varias décadas, y que estaba enraizada en la relación existente entre la sociedad y el Estado. Relación que había sido creada y alimentada por el peronismo, las fuerzas armadas y el rol creciente de las centrales sindicales. De ahí que el gobierno de la mandataria peronista no contara con los mecanismos institucionales para resolver la caótica situación.

Basta observar algunos indicadores, los que resultan modestos si lo comparamos a las dramáticas cifras de estos últimos años. En 1975 el PBI per cápita había bajado un 3%. El salario real estaba una cuarta parte más bajo que el nivel que tenía cuando empezó el gobierno justicialista, en mayo de 1973; y en marzo de 1976, cuando el gobierno estaba a punto de ser derrocado, la emisión de billetes se había multiplicado en catorce veces. Solamente en el año 1975 la inflación había aumentado en un 334,8%, según información oficial (5).

De ahí que no resultara sorprendente la acción de las fuerzas armadas argentinas el 24 de marzo de 1976, las que terminaron derrocando a la Presidenta e instaurando, a diferencia de otras experiencias autoritarias, un proyecto de reforma estructural de la sociedad argentina, que se denominó "El proceso de reorganización nacional"

Se pretendió a través de la economía reformar radicalmente el sistema político y social. Las fuerzas armadas se sentían con la legitimidad para hacerlo, no era primera vez que intervenían en la vida política de su país, por lo tanto, concebír que sólo a través de una experiencia autoritaria se podía llevar a cabo un programa de reformas. La voluntad política emanaría de la fuerza y no del consenso.

Sin embargo, todo este deseo de transformación de las estructuras del país no fueron definidos en una política sistemática, lo que, sumado a una violenta represión para terminar con la guerrilla interna, terminaron provocando un rápido desgaste.

Se produjo así, un rápido abandono de la política antiinflacionaria contractiva iniciada en la segunda mitad de 1977, lo que se debió no a la imposibilidad de controlar un mercado de capitales abierto al exterior, sino a la negativa del gobierno a enfrentar las consecuencias sociales y estructurales de dicha política. Las fuerzas armadas vetaron desde un principio, invocando razones de seguridad, toda política

\* ERP: Ejército Revolucionario del Pueblo

(5) *Ibid.*, p. 141.

económica que significara un alto nivel de desempleo. El objetivo principal del proyecto militar era disciplinar a las fuerzas sociales en pugna; sin embargo, ello no involucraba provocar una crisis en la industria que generará la consiguiente tensión social.

Todas estas indefiniciones, sumado a la crisis al interior del régimen, lo terminó precipitando, en 1982, como último intento de conseguir legitimidad, a la guerra de las Malvinas, que se constituyó en el epitafio del régimen militar. El traspaso del mando fue rápido, y en las elecciones del 30 de octubre de 1983 triunfa el radicalismo, y llegó al poder el presidente Raúl Alfonsín quien intentaría llevar a cabo las reformas económicas y políticas del país a través de un alto nivel de consenso. Lo que pareció una tarea posible, considerando el desprestigio del gobierno militar, permitiría dar por superado las constantes intervenciones militares con el fin de derrocar al gobierno (aunque no así los levantamientos para demostrar disconformidad frente a determinadas políticas), la excelente imagen internacional del nuevo gobierno, y los niveles de apoyo que revelaban las encuestas durante los primeros meses.

Sin embargo, Alfonsín, a quien se le reconocía un nivel de liderazgo por encima del radicalismo, vaciló en la aplicación de políticas, temiendo perder a través de medidas impopulares el apoyo que evidenció el gobierno en sus primeras etapas, y privilegió medidas menos dolorosas, como el Plan Austral, que terminaron por fracasar, lo que produjo una crisis de credibilidad, que le dificultó incluso encontrar apoyo en su propio partido para aplicar políticas en la dirección correcta. Todas sus propuestas de privatización de empresas fueron rechazadas tanto por el justicialismo, como al interior del radicalismo. Esto, sumado a las presiones de los sindicatos peronistas que demandaban aumentos constantes de salarios, llevó al gobierno radical a terminar su mandato en medio de saqueos, y con una ciudad de Buenos Aires en penumbra que simbolizaba la dramática crisis energética, que por ineficiencia, envolvía al país.

El alfonsinismo fue un fracaso, porque una vez más quien había asumido el poder como líder nacional, no contó con el apoyo de su partido ni de otras organizaciones políticas y sociales, cuando necesitó asumir decisiones que implicaban un costo social. Ahora bien, esta posición resulta comprensible si consideramos que la base de sustentación de los gobiernos se reduce a la popularidad del gobernante. De ahí, que cualquier medida que no intente mantener ese apoyo resulta altamente inconveniente en un corto plazo, y no desee ser asumida por ningún partido. Dadas esas circunstancias, resulta muy difícil que una vía consensual provoque algún resultado.

En las elecciones de mayo de 1989, el triunfo volvió al peronismo en la persona de Carlos Saúl Menem, quien logró la victoria a través de un ambiguo discurso, donde se hacía renacer la esperanza de los resultados, pero no de los sacrificios para alcanzarlos. Luego de la asunción del mando, en julio de 1989, debido a la magnitud de la crisis económica, el nuevo mandatario se embarcó en un esquema contradictorio con su propia propuesta electoral, desconcertando a sus partidarios, y estusiasmando a sus contradictores. Sin embargo, nos enfrentamos

nuevamente a apreciaciones personalistas que le hacen dudar, y perder un tiempo precioso, en los inicios de su gobierno.

En siete meses el gobierno de Menem puso en marcha seis planes y no aplicó cabalmente ninguno. La primera etapa fue Bunge y Born de estricta estrategia neoliberal. Cuando se le advirtió que el plan económico implicaba un serio costo político y social, el presidente Menem escuchó a los diputados peronistas y pidió la renuncia del ministro Rapanelli. Es decir, una vez más el temor a perder la popularidad constituyó un factor determinante en la toma de decisiones, lo que resulta comprensible si consideramos que la base de sustentación del poder han sido, durante todo este siglo, la fuerza, los intereses y el carisma.

En el caso de Menem, la posibilidad de llevar a cabo una reforma real de la economía de su país, permitiendo mayores niveles de libertad económica, y disminuyendo el enorme poder estatal, pasa por su propia capacidad de liderazgo, la que se ha resentido por no haber aprovechado su primer tiempo de mandato. Sin embargo, el riesgo que corre el actual presidente, en término de ser capaz de preservar el régimen democrático, y solucionar la grave crisis económica, es mayor si consideramos que su gobierno ha sufrido una crisis de credibilidad al inicio de su período. De ahí que la posibilidad de tener éxito pasa necesariamente por la convicción que demuestre en sus políticas, de manera tal, que le permita superar las tensiones y presiones que está sufriendo desde su propio partido y de los líderes sindicales. Si lo logra, y los indicadores económicos comienzan a revelar una reversión del proceso de decadencia que ha vivido la Argentina durante varias décadas, habrá llegado el momento de llevar a cabo las transformaciones institucionales que permitan la generación de un sistema político moderno, que privilegie las instituciones, el pragmatismo y el desarrollo del país.